



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, _ 14 FEB 2020

Auto Interlocutorio No. 64.

MAGISTRADO PONENTE: OSCAR SILVIO NARVAEZ DAZA

MEDIO DE CONTROL:	REPARACIÓN DIRECTA
EXPEDIENTE:	76001-33-33-012-2019-00112-01
DEMANDANTE:	MARINO GIRALDO VARGAS Y OTROS
DEMANDADO:	NACIÓN –MINDEFENSA-POLICÍA NACIONAL
ASUNTO	REVOCA AUTO

I. AUTO QUE RESUELVE RECURSO DE APELACION

Se resuelve el recurso apelación propuesto por la parte demandante, contra el auto interlocutorio No. 507 del 12 de junio de 2019 proferido por el Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito de Cali, que rechazó la demanda por caducidad de la acción.

II. ANTECEDENTES

En ejercicio del medio de control de reparación directa consagrado en el artículo 140 del CPACA, el señor Marino Giraldo Vargas y otros, demandaron a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y solicitaron¹, se indemnizaran por los daños y perjuicios materiales causados por la desaparición del camión del señor Germán Alberto Jiménez, en hechos ocurridos el 22 de febrero de 2017, cuando un grupo de policías adscrito a la Estación del Lido ingresaron al parqueadero en donde se encontraba estacionado y procedieron a su inmovilización argumentando un pendiente judicial, desde dicha fecha, el propietario del automotor no volvió a tener noticias del mismo.

III. DE LA PROVIDENCIA APELADA:

Mediante auto interlocutorio No. 507 del 12 de junio de 2019² el Juzgado Doce Administrativo de Cali rechazó la demanda, al considerar que el medio de control de reparación directa se encuentra caducado, en virtud a lo dispuesto en el literal i) del numeral 2º del artículo 164 del CPACA, ya que el cómputo inició el 23 de febrero de 2017, por consiguientes el demandante tenía hasta el 23 de febrero de 2019 para interponer la demanda, sin embargo fue presentada el 24 de abril de 2019 y la solicitud de conciliación prejudicial no interrumpió dicho término, ya que fue radicada el 13 de marzo de 2019 ante la Procuraduría 57 Judicial I para asuntos administrativos de Cali.

IV. FUNDAMENTOS DEL RECURSO:

¹Ver folio 1-5
²Ver folio 46



Sostiene la parte recurrente, que el día 23 de febrero de 2017, unos policías decomisaron el vehículo con una supuesta orden de embargo, actuar que tenía una apariencia de legalidad, por tanto a partir de esta fecha no se cuenta el término de caducidad, ya que al día siguiente, el propietario del automotor se dio cuenta de la retención, y al no tener razón del mismo presentó ante la Fiscalía General una denuncia penal. Por tanto, considera que el término de caducidad debe contarse desde la fecha en que dicha denuncia penal fue presentada.

En virtud de dichos argumentos, solicita se revoque el auto No. 507 del 12 de junio de 2019 proferido por el Juzgado Doce Administrativo Oral de Cali.

V. CONSIDERACIONES:

5.1 Competencia

De conformidad con lo previsto en el artículo 153 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, esta Corporación es competente para conocer del recurso de apelación presentado contra la providencia de primera instancia.

5.2 Problema Jurídico

En atención al recurso de apelación interpuesto, corresponde al Despacho determinar si se debe confirmar o revocar la decisión del Juez de primera instancia que rechazó la demanda de reparación directa presentada por los demandantes, por operar el fenómeno de caducidad del medio de control de reparación directa.

5.3 El ejercicio oportuno de la acción

El Consejo de Estado, en forma reiterada, ha sostenido que la caducidad se encuentra instituida para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, frente a aquellos eventos en los que determinadas acciones judiciales no se ejercen dentro de un término específico. De ahí, que las partes les correspondan asumir la carga procesal de impulsar el litigio dentro de ese plazo, el cual es fijado por la ley y, por ello, si no se hace en tiempo pierden la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho³.

Cabe resaltar que la referida figura no admite suspensión, salvo que se presente una solicitud de conciliación extrajudicial en derecho, de acuerdo con lo previsto en las Leyes 446 de 1998 y 640 de 2001; tampoco admite renuncia y de encontrarse probada, debe ser declarada de oficio por el juez.

5.4. CADUCIDAD – RECUENTO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL:

Para comenzar, debe decirse que en el presente asunto el medio de control ejercido es el de Reparación Directa, contenido en el artículo 140 de la Ley 1437 de 2011 y, en cuanto a la oportunidad para presentar la demanda, el literal (i) del numeral 2º del artículo 164 ibídem, señala:

³ Consejo de Estado, Sección Tercera, C.P.: Mauricio Fajardo Gómez. 6 de agosto de 2009. Expediente: 36.834 (auto). Reiterado en Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección "A". C.P.: Mauricio Fajardo Gómez. Radicación: 250002326000199902635 – 01 (27588). 26 de febrero de 2014.



Radicación : 76001-33-33-012-2019-00112-01
 Medio de control : REPARACIÓN DIRECTA
 Demandante : MARINO GIRALDO VARGAS Y OTROS
 Demandado : NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL

3

“Artículo 164. La demanda deberá ser presentada:

(...)

2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:

(...)

i) Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de **dos (2) años**, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia **de la acción u omisión causante del daño**, o de cuando **el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo** si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.”

Importante es transcribir el siguiente pronunciamiento, en el cual el Consejo de Estado⁴ toma como punto de referencia el literal i) del numeral 2º del artículo 164 del C.P.A.C.A. Al respecto dispuso:

“El propósito esencial de la caducidad es evitar que las diversas situaciones generadoras de responsabilidad se extiendan de manera indefinida en el tiempo, brindando así seguridad jurídica al convertirlas en situaciones jurídicas consolidadas. (...) la demanda de reparación directa caducará, por regla general, al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia. (...) en algunos casos resulta necesario identificar el momento preciso en el cual se configura o consolida el daño para poder computar el término de caducidad del medio de control, situación que reviste de complejidad si se tiene en cuenta que en relación con el tiempo no todos los daños pueden ser verificados en un momento exacto, pues es posible que sus efectos se prolonguen en el tiempo o incluso se consoliden en una etapa posterior a la fecha de ocurrencia del hecho dañoso”.

Sobre un caso similar al de autos, el Consejo de Estado⁵ manifestó:

De conformidad con lo previsto en el artículo 136 del C.C.A., la acción de reparación directa deberá instaurarse dentro de los dos años contados a partir “del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa.”

En el presente caso, la pretensión resarcitoria tiene que ver con la pérdida del vehículo de placa XI-1226 a disposición de la Dirección Nacional de Estupefacientes, previa incautación por la Policía de Cundinamarca por el transporte de sustancias controladas, sin contar con los permisos respectivos.

Proferida sentencia y establecido que el Camargo Camargo no quedó vinculado al proceso con radicado No 17345, el 22 de noviembre de 1995, el Juzgado Regional de Santafé de Bogotá ordenó se le entregue el bien, quien, en desarrollo de las actuaciones como tercero interesado, demostró su condición de propietario. Además, una vez adelantadas las gestiones para la entrega, fue informado del hurto por la Asociación de Plataneros del Urabá el 12 de enero de 1996.

Conforme lo anterior, como la demanda se presentó el 19 de diciembre de 1997, resulta evidente que la acción se ejerció en el del término previsto por la ley (art. 136 del C.C.A.), conforme lo sostuvo el a quo. Lo anterior es así porque, aunque la pérdida

⁴Sección Tercera, sentencia del 27 de marzo de 2014, Consejero Ponente Dr. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero.

⁵ Consejo de Estado, Sección Tercera Subsección B, sentencia del 30 de julio de 2015, radicado nro. 25000232600019980597601 (32575).

del vehículo haya tenido lugar, según la denuncia, el 26 de julio de 1995, lo cierto es que el señor Salvador Camargo Camargo solo conoció del hecho el día 12 de enero de 1996, fecha a partir de la cual debe contarse el bienio concedido por la ley para instaurar la acción de reparación directa.

De lo anterior se deducen dos reglas para el cómputo del término de caducidad del medio de control de reparación directa: 1.-Los dos años se cuentan, a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño ó, 2.-Sino se configura lo anterior, los dos años se cuentan desde que el demandante tuvo o debió tener conocimiento del daño si fue en fecha posterior a la ocurrencia de la acción y omisión que lo causó, siempre y cuando pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de la ocurrencia de la actuación reprochable de la administración.

5.2 Caso Concreto

En el presente asunto, el medio de control de reparación directa se promueve con el fin de declarar administrativamente responsable a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional por la pérdida del vehículo de placa SPK271 de propiedad del señor Germán Alberto Jiménez, que fue decomisado por agentes de la policía adscritos a la estación del El Lido y a la fecha no se conoce su paradero. Por tanto, establece que la entidad demandada es responsable por la pérdida del vehículo.

Al respecto, el a quo a través del auto No. 507 del 12 de junio de 2019, rechazó el presente medio de control por haber operado el fenómeno jurídico de la caducidad, al considerar que su computo iniciaba el 23 de febrero de 2017, ya que el 22 de febrero el vehículo fue incautado por unos policías adscritos a la estación de policía del Lido y desde esa fecha el propietario no volvió a saber del mismo, por tanto, los dos años que dispone el literal i) del numeral 2º del artículo 164 del CPACA, fenecieron el 23 de febrero de 2019, la demanda se presentó el 26 de abril de 2019 y la solicitud de conciliación prejudicial se presentó el 13 de marzo de 2019.

Sobre el particular, el apoderado judicial de la parte demandante alega que dicho computo debió llevarse a cabo a partir del 14 de marzo de 2017, fecha en la cual se presentó la denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por la pérdida del vehículo de placa SPK271 y no desde la fecha en que fue incautado, como lo hizo el A quo.

Una vez efectuado el anterior recuento, corresponde a la Sala determinar la fecha en la cual el propietario del vehículo tuvo conocimiento de su desaparición, para ello se analizarán los argumentos expuestos en la demanda y las pruebas allegadas al plenario, partiendo de la base que el 22 de febrero de 2017 el automotor fue incautado por la Policía cuando se encontraba estacionado en un parqueadero, y no se volvió a saber nada de su paradero.

Demanda. Se manifiesto que el 22 de febrero de 2017, el automotor de placa SPK271, que se encontraba estacionado en un parqueadero ubicado en la ciudad de Cali, fue incautado por unos policías adscritos a la Estación del Lido, eventualidad que el administrador del lugar informó al propietario, y al no tener noticias del vehículo, procedió a presentar el 14 de marzo de 2017 la denuncia penal por hurto.

De la demanda se desprende que el demandante tuvo conocimiento de la fecha

Radicación : 76001-33-33-012-2019-00112-01
 Medio de control : REPARACIÓN DIRECTA
 Demandante : MARINO GIRALDO VARGAS Y OTROS
 Demandado : NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL



exacta en la cual el vehículo fue incautado por los agentes de policías, 22 de febrero de 2017.

Denuncia penal. Del relato que el administrador del parqueadero ubicado en el barrio el Lido suministró a la Fiscalía General de la Nación, se desprende, que el 22 de febrero de 2017 el vehículo de propiedad del señor Marino Giraldo Vargas fue incautado por unos agentes de la Policía Nacional, y al no tener conocimiento de su paradero, a los tres días de la incautación, 25 de febrero de 2017, se acercó a la estación de policía El Lido en donde le informaron que no tenían conocimiento de su ubicación⁶.

De lo expuesto, se observa que no existe certeza de la fecha en la cual el demandante tuvo conocimiento de la pérdida del vehículo, ya que, quien acudió a la estación de policía para averiguar el paradero del automotor fue el propietario del parqueadero, quien al no recibir noticias del mismo presentó el denuncia penal, actuación que no fue desplegada por el propietario del automotor, de quien no existe certeza de la fecha en la cual se dio cuenta de la desaparición del automotor, por lo que no es claro si existe o no caducidad del medio de control de reparación directa.

Siendo así, al existir duda sobre el momento en el cual el demandante se dio cuenta del hecho dañoso y en aras de garantizar el acceso a la administración de justicia, se debe hacer aplicación a los principios *pro actione* y *pro domato*:

*“Dicha norma entendida de manera racional debe interpretarse en el sentido de que no basta con la realización pura y simple del hecho causante del daño sino que es necesario que haya sido conocido por el afectado, lo cual en la mayoría de las veces ocurre al mismo tiempo. Sin embargo, cuando la producción de esos eventos no coincida temporalmente, el principio *pro actione* debe conducir al juez a computar el plazo de caducidad a partir del momento en el cual el demandante conoció la existencia del hecho dañoso por la sencilla razón de que sólo a partir de esta fecha tiene un interés actual para acudir a la jurisdicción.*

(...)

*Así mismo, en el derecho español existe una línea doctrinaria y jurisprudencial orientada por el principio *pro domato* que busca aliviar los rigores de las normas que consagran plazos extintivos para el ejercicio de las acciones y aboga por la cautela y el criterio restrictivo con el que deben interpretarse y aplicarse dichas normas,⁷”*

Ahora bien, el Consejo de Estado ha hecho alusión al principio *pro damato*, indicando que este busca mitigar los rigores de las normas que consagran plazos extintivos para el ejercicio de los medios de control y que en el evento en el que exista duda razonable respecto del cumplimiento de los requisitos que determinen la caducidad, es posible admitir la demanda sin perjuicio de que el Juez en momento procesal posterior estudie nuevamente el caso concreto y determine con elementos probatorios fehacientes, la viabilidad de la misma. Por lo que, este principio es una excepción a la aplicación inexorable de las normas procesales, ya que le permite al operador judicial interpretar la norma de manera más flexible. Así lo dispuso en el siguiente pronunciamiento:

Sin embargo, como no existe certeza de la fecha en que se efectuaron los pagos, ya que en el expediente no reposa constancia en ese sentido, esta judicatura revocará la

⁶Folio 21 a 23 del expediente.

⁷Sentencia del Consejo de Estado, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION TERCERA, Consejero ponente: RAMIRO SAAVEDRA BECERRA, providencia fechada trece (13) de diciembre de dos mil siete (2007), Actor: GONZALO MORENO RODRIGUEZ Y OTROS.



decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en aplicación de los principios pro actione y pro damato y la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal, que imponen que se debe admitir la demanda cuando no exista certeza sobre la fecha a partir de la que corresponde empezar a contar el término de caducidad, sin perjuicio de que el juez, luego del acopio de pruebas y al momento de decidir, aborde de nuevo el asunto y declare la caducidad del medio de control, si se demuestra que no estaba vigente al momento de instaurar la demanda" (subrayado fuera del texto)⁸.

Respecto a la caducidad en el medio de control de Reparación Directa, cuando existe duda de la fecha en la cual el demandante se dio cuenta del daño antijurídico, en reciente jurisprudencia el Consejo de Estado⁹ ha manifestado lo siguiente:

"...De la caducidad del medio de control de Reparación Directa.

(...).

La regla general indica que el término de caducidad se comienza a contabilizar a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa. No obstante, en otros casos, no es tan evidente la fecha cierta a partir de la cual se debe empezar a contabilizar el plazo de dos años previsto en la ley. En estos eventos ocurre que el daño se produce o se manifiesta con posterioridad al hecho dañino que lo causa, es decir, la causa lesiva no es contemporánea con el daño, razón por la cual se impone a fortiori acoger una interpretación flexible —fundada en el principio pro damato de la norma— que establece el término de caducidad con el fin de proteger el derecho de acceso a la administración de justicia y de asegurar la prevalencia del derecho sustancial. Si se considera que el daño es el presupuesto primordial para la procedencia de la acción de reparación directa, es obvio considerar que el plazo de dos años previsto en la ley no podrá empezar a contabilizarse a partir del "acaecimiento del hecho, omisión y operación administrativa", sino excepcionalmente a partir del momento en que el daño adquiere notoriedad, esto es, cuando i) la víctima se percató de su ocurrencia, o ii) desde la cesación del mismo cuando el daño es de tracto sucesivo o ejecución continuada. (...) (Subraya y Negrilla fuera de texto).

Entonces, la Sala considera que con los elementos probatorios obrantes en el plenario no es posible establecer si existe o no caducidad en la presente medio de control, por lo que de conformidad con lo expuesto por el Consejo de Estado en la providencia señalada en líneas anteriores y en virtud del principio *pro damato* se revocará el auto interlocutorio No. 507 del 12 de junio de 2019, proferido por el Juzgado Doce Administrativo Oral de Cali, a través del cual se rechazó la demanda por considerar que había operado la caducidad del medio de control de reparación directa.

Lo anterior, con el fin de que la Juez admita el presente medio de control y resuelva sobre ese aspecto en la audiencia inicial o al proferir sentencia de primera instancia, según el momento en que el material probatorio sea fehaciente para demostrar o no la ocurrencia de la caducidad.

En consecuencia, se;

⁸ Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 14 de enero de 2020, radicación número: 25000-23-36-000-2018-01225-01(63698).

⁹ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera- Subsección A. Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN del 21 de junio de 2019. Radicación número: 25000-23-36-000-2017-01197-01 (61157). Actor: HERNÁN RINCÓN CASTRO Y OTROS. Demandado: ECOPETROL. Referencia: MEDIO DE CONTROL DE Reparación Directa.



Radicación : 76001-33-33-012-2019-00112-01
Medio de control : REPARACIÓN DIRECTA
Demandante : MARINO GIRALDO VARGAS Y OTROS
Demandado : NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL

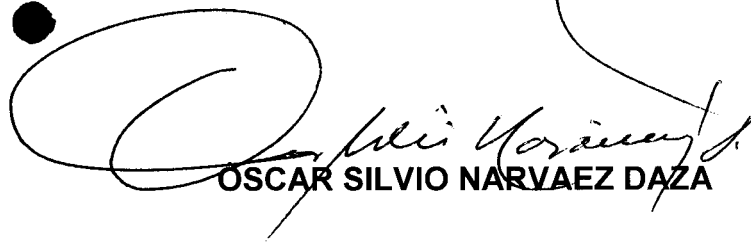
RESUELVE:

PRIMERO.- REVOCAR el auto interlocutorio No. 507 del 12 de junio de 2019, proferido por el Juzgado Doce Administrativo Oral de Cali, mediante el cual se rechazó la demanda, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Ejecutoriada la presente providencia envíese el expediente al Juzgado Doce Administrativo Oral de Cali, para que continúe con el trámite procesal pertinente, esto es, decida sobre la admisión de la presente demanda.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE,

Los Magistrados



OSCAR SILVIO NARVAEZ DAZA



OMAR EDGAR BORJA SOTO



EDUARDO ANTONIO LUBO BARROS